

de Gobernador, la Legislatura infringió el artículo 77 de la Constitución del Estado, esta infracción por sí sola no puede motivar el recurso de amparo de garantías, sino ser objeto de apreciación de la misma Legislatura como cuerpo electoral.

Por las consideraciones expuestas, y con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, se resuelve lo siguiente. Primero: se revoca la sentencia que el Juez de Distrito del Estado de Querétaro pronunció con fecha 22 de Marzo próximo pasado, en la que declara: que la Justicia de la Unión ampara y protege al C. Juan N. Llaca y á su representada D^a Guadalupe Velasco, contra los decretos números 172 y 178, de 30 de Diciembre de 1872, expedidos por la Legislatura de dicho Estado. Segundo: la Justicia de la Unión no ampara ni protege al C. Llaca ni á la S^a Velasco contra los mismos decretos, en virtud de no haber garantía individual violada.—Devuélvanse las actuaciones al juzgado de Distrito que las elevó en revisión, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes: publíquese por los periódicos, y archívese á su vez el Toca.—Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*Pédro Ogazon.—Juan J. de la Garza.—José Arteaga.—Pedro Ordaz.—J. M. del Castillo Velasco.—M. Auza.—S. Guzman.—M. Zavala.—José García Ramírez.—Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Mayo 9 de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el juzgado de Distrito de Hidalgo por varios mineros, beneficiadores y fundidores de metales de plata del mineral de Pachuca, contra una orden del Administrador de rentas del mismo, por la cual se impone á los expresados, la obligación de hacer manifestaciones de las fundiciones que hicieren cada 15 días, con expresión de los nombres de los dueños de las platas.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL

El Promotor fiscal dice: que en el recurso interpuesto ante este Juzgado por los beneficiadores y fundidores de plata de este mineral, se pide amparo y protección contra la Administración de rentas de esta Ciudad, y por conclusion que se ordene la suspensión del acto reclamado.

Salvando el que suscribe, el mejor acuerdo de V. opina porque se decrete dicha suspensión, pues, juzga ser de difícil reparación los perjuicios que se originarían á los solicitantes, si al concederse el amparo, ya las arcas del Estado hubieran percibido la multa impuesta.

En esta virtud y con fundamento del artículo 6º de la ley de 20 de Enero de 1869, pide el Promotor como acaba de exponer:

Pachuca, Enero 23 de 1873. (firmado) —*M. Sanchez*.

Es copia que certifico. Pachuca, Mayo 29 de 1873.—*F. Briseño*, secretario.

Otro pedimento del C. promotor fiscal.

El promotor fiscal dice: que el 15 de Febrero próximo pasado, los beneficiadores y fundidores de metal de plata en este mineral, CC. Juan Gould, Tomas Tello, Marcial Islas, Teodoro Guzman, Javier Elscser, Ma-

nuel Carmona, Trinidad Hidalgo y Rafael Islas, solicitaron de este Juzgado de Distrito amparo y proteccion, contra el C. Administrador de rentas de esta ciudad, que les impone la obligacion de hacer manifestaciones sobre la fundicion ó beneficio y les conmina, en caso contrario, con una multa de diez á quinientos pesos.

Exponen ademas, que no existiendo ley alguna que les imponga tal precepto, se les inquiete no solo en sus personas sino tambien en sus bienes ó intereses, contra lo prevenido expresamente en los artículos 5º y 16 y 21 de la Constitucion general.

El C. Administrador informando sobre el acto reclamado, dice: que sus órdenes provienen del Supremo Gobierno, y que al cumplirlas, no se violan ningunas de las garantías de que se quejan los solicitantes.

Se apoya, en que los procedimientos no son de las facultades con que se halla investido el Ejecutivo por los artículos 114 de la Carta fundamental y los 61 y 62 fraccion 1ª de la del Estado; y en que si no se empleare el recurso de que se ha valido la administracion, la ley del Estado, número 116, quedaría ilusoria.

El ministerio fiscal advierte, que no se trata en la presente cuestion de dar cumplimiento á una ley federal para que se pueda tener en consideracion lo dispuesto en el artículo 114; advierte en el mismo, que no se trata de dar cumplimiento al decreto número 116 del Estado, puesto que este como confiesa el mismo Administrador, comprende á los dueños de minas y no á los beneficiadores; y por último, que no existiendo ley que imponga contribucion ó obligacion alguna á los quejosos, se les hará reportar una molestia sin su pleno consentimiento, se les molestaría en sus personas y posesiones y se les impondría una multa, llegado caso de falta de cumplimiento, sin que el caso y modo esté expresamente determinado por la ley: en una palabra, se violan en sus personas las garantías de que se ha pedido proteccion.

Por todo esto, C. Juez, el suscrito promotor fiscal, pide á V. se sirva declarar que la Justicia Federal ampara á los CC. Juan Gould, Tomas Tello, Marcial Islas, Teodoro Guzman, Javier Elseser, Manuel Carmona, Trinidad Hidalgo y Rafael Islas. —Pachuca, Febrero 17 de 1873.—Firmado.—*M. Sanchez.*

Es copia que certifico. Pachuca, Marzo 19 de 1873.—*F. Briseño.*

Alegato del C. Promotor.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal en el juicio que siguen los beneficiadores y fundidores de metales de plata de este mineral, su estado supuesto, dice: que por haber demostrado en su anterior dictámen con la confesion que hace el C. Administrador de rentas, que á los solicitantes no comprende el decreto del Estado num. 156, lo reproduce en todas sus partes, y solo concluye pidiendo como en aquel, sean amparados los quejosos.

Pachuca, Mayo 12 de 1873. (firmado) —*M. Sanchez.*—*F. Briseño*, secretario.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Pachuca, Marzo 20 de 1873.—Visto este juicio promovido por los Sres. Juan Gould, Tomás Tello, Marcial Islas, Teodoro Guzman, Javier Elseser, Manuel Carmona, Trinidad Hidalgo y Rafael Islas, contra una orden del C. Administrador de rentas que les impone, como beneficiadores de metales, la obligacion de *rendir cada quince dias una manifestacion de las fundiciones que hagan, con expresion de los nombres de los dueños de los metales, y protesta de decir verdad ó de estar á la responsabilidad que causa la ocultacion de ella, conminándolos en caso de desobediencia con una multa de diez á quinientos pesos, sin perjuicio de hacer siempre*

las manifestaciones y de pagar lo que causen las extracciones de que se tenga conocimiento; cuya disposicion segun los quejosos, ya por el servicio que se les exige sin su consentimiento, como por la molestia que les infiere sin causa legal, y por la multa y pena que les impone sin estar determinadas por alguna ley, ataca en sus personas las garantías que otorga el Código fundamental en sus artículos 5º, 16 y 21. Visto el informe de la autoridad ejecutora, en el que para justificar su providencia procedente del Ejecutivo del Estado, alega principalmente: 1º, que el referido art. 5º trata solo de servicios ó de trabajos de persona á persona, mas no de particulares en favor del Gobierno; 2º, que no es exacto, como afirman los quejosos, que no haya causa legal ó ley alguna que autorice al Ejecutivo para imponerles la obligacion que rechazan, pues la Constitucion local en su art. 61 fraccion 4ª, lo faculta para proveer al cumplimiento de las leyes; y de esta amplísima facultad se desprende necesariamente la de dictar la providencia reclamada, como que sin esta le sería imposible proveer al cumplimiento del decreto 156, que estableció una contribucion del dos por ciento sobre el valor de las platas que se extraigan de los minerales del Estado; y 3º, que el sistema de las manifestaciones ha sido adoptado por todas las legislaciones del mundo y aceptadas por todos los individuos á quienes se exigen, sin que hasta hoy se haya reclamado contra ellas. Visto por último los alegatos producidos, la citacion para sentencia y cuanto de autos consta y ver convino:

Considerando respecto de la garantía del artículo 5º: 1º, que el servicio que se exige á los quejosos, por pequeño que sea y por insignificante que se considere, es siempre un trabajo propiamente tal, reprobado por aquel precepto; 2º, que es un error pretender con el C. Administrador, que esta disposicion se refiere únicamente á trabajos de persona á persona y no de particulares

hacia los gobiernos, por que los términos absolutos en que está concebida, no dan lugar á esta limitacion, máxime cuando esta cuestion está ya resuelta en favor de la libertad absoluta del trabajo, por ejecutorias que el ejecutivo del Estado no puede haber olvidado; 3º, que aun cuando debieran prevalecer las opiniones de los CC. diputados constituyentes á quienes alude el C. Administrador, debia reflexionar este funcionario que no son de la misma naturaleza los servicios gratuitos y forzosos exigidos por el gobierno en el orden regular de las cosas y los que demanda la sociedad en casos de suprema angustia, como en los de incendio, inundacion y otros semejantes, pues estos se exigen en virtud de una ley incluíble, la de la propia conservacion, á la que nadie puede resistirse sin ser víctima del peligro que amenaza, en tanto que los primeros pueden dejarse de prestar sin detrimento de la sociedad en general, ni de los individuos en particular, por que la caída de un gobierno, principalmente si se ha hecho insostenible por su tiranía y desaciertos, motivada por el egoismo de los gobernados pero sin faltar á sus deberes prescritos expresamente por las leyes constitucionalmente expedidas, no tendría mas consecuencias que la de sustituirlo con otro tal vez mejor, y en armonía para su conservacion con los intereses de la mayoría de los individuos.

Considerando en cuanto al artículo 16: 1º, que toda violencia física ó moral, ejercida sobre una persona, es un agravio y una molestia que se le infiere; 2º, que la providencia reclamada, con los apercibimientos que contiene, al sujetar á los quejosos á un trabajo que resisten y al imponerles una obligacion odiosa y repugnante, convirtiéndolos sin su voluntad en agentes del fisco y delatores de las fortunas y acciones de los demas ciudadanos, constituye un acto de verdadera violencia moral, y una molestia, por lo mismo, comprendida en el espíritu del citado artículo constitucional. 3º, que aun cuando esta consideracion no fuera bas-

tanto exacto con relacion á las personas de los quejosos, no cabe duda que el caso está comprendido en esa disposicion, por razon de sus intereses que quedan sujetos por la providencia en cuestion, al pago de la multa que se imponga y de los derechos que los dueños de las platas debían satisfacer; 4º, que siendo como es evidente que la Orden del C. Administrador de rentas, infiere una molestia en las personas é intereses de los quejosos, solo falta averiguar si carece de causa legal para el efecto de declararla inconstitucional; 5º, que no hay ni puede haber ley alguna que faculte al Gobierno para gravar á unos ciudadanos con mas cargas que á los demás, porque es un principio universalmente reconocido, que las cargas públicas deben repartirse proporcionalmente entre todos los miembros de una sociedad, y la menor desigualdad en este particular constituye un exeso de poder, que ninguna legislacion puede autorizar; 6º, que siendo meramente personal la obligacion de pagar el impuesto creado por el decreto núm. 156, y no estando impuesta esta obligacion á los *beneficiarios* de metales sino á los que los *extraigan* de los minerales del Estado, ninguna ley puede autorizar al Ejecutivo, para hacer responsables á los quejosos por obligaciones ajenas, pues es bien sabido que estas no pasan de las personas que las contraen; 7º, que representando todo trabajo un capital moral determinado, el servicio que se exige á los agraviados, ya lo presten personalmente, ya por medio de algun dependiente á quien paguen, constituye un positivo gravámen á su capital moral y una desigualdad en último resultado en los impuestos, contra lo prevenido por el artículo 31 fraccion 2ª de la Carta federal, para cuya infraccion no puede estar autorizado ningun gobierno; 8º, que siendo condicion esencial de toda pena el estar determinada expresamente por alguna ley, y no estando el Ejecutivo de este Estado facultado para dictar leyes penales, en inconcuso que tampoco lo está para hacer responsables á

los peticionarios del amparo, *al pago de los derechos que otros deben satisfacer*, por importar esto una pena propiamente dicha; 9º, que no solo no hay ni puede haber fundamento alguno legal para exigir los servicios que expresa la Orden del C. Administrador, sino que expresamente lo prohíbe el artículo 8º de la Constitucion local, segun el que, *ninguna autoridad ó funcionario podrá exigir á los habitantes del Estado, servicios ó impuestos que no estuvieren decretados previamente por leyes constitucionales expedidas*, cuya disposicion llama fuertemente la atencion sobre el particular del caso que nos ocupa; 10º, que de admitirse el principio septado por el Administrador, de que en las facultades del Gobierno de *proveer* al cumplimiento de las leyes, se contiene comprendida la de imponer el servicio de que tratamos, tendríamos que admitir igualmente que no hay una sola garantía posible, pues á protesto de aquella facultad podría privarse á todos los ciudadanos de su libertad, de sus vidas y de sus intereses, que son siempre ocasion de todo crimen, que los Gobiernos deben evitar; 11º, que tampoco puede admitirse el que la providencia reclamada es legal por ser imposible de otra manera recaudar el impuesto creado por el decreto núm. 156, porque cuando por falta de tino en los legisladores ó por incapacidad en el encargado del Ejecutivo, las leyes tropiezan en su ejecucion con las garantías individuales, son aquellas y no estas las que deben suprimirse, pues los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones (artículo 1º de la Carta federal); 12º, que aunque es cierto que el sistema de las manifestaciones ha sido adoptado por varias legislaturas, y aceptado por los ciudadanos, tambien lo es que aquellas se exigen *no á otros* que á los mismos causantes del impuesto, los que al ser justamente gravados con él, lo están con todas las molestias consiguientes, y sobre ellos solos deben recaer las amonestaciones, los apercibimientos y demas providencias

coersitativas que tanta falta hacen al Ejecutivo para dar lleno á sus deberes.

Considerando, en cuanto á las garantías del artículo 21: 1º, que las autoridades políticas ó administrativas, no pueden segun este artículo, imponer multas aun menores de quinientos pesos, que no estén *expresamente* determinadas por la ley (S. Castillo Velasco en su derecho constitucional, capítulo IV.), pues de otra manera la propiedad de las personas sería siempre el patrimonio de los gobiernos, que en multas parciales y continuas de menos de quinientos pesos, podrían arrebatarla toda entera; 2º, que no habiendo ley alguna que castigue expresamente la falta en que incurran los quejosos negándose á cumplir la obligación que se les impone, es inconcuso que la multa con que se les apercibe es contraria á aquella prevencion constitucional.

Por tales consideraciones y con fundamento de los artículos 101 y 102 del Código fundamental, se decreta: que la Justicia de la Union ampara y protege á los CC. Juan Gould, Tomas Tello, Marcial Islas, Teodoro Guzman, Javier Elscser, Manuel Carmona, Trinidad Hidalgo y Rafael Islas, contra la Orden del C. Administrador de rentas de este Distrito, de la que se ha hecho mencion, por atacar las garantías individuales que el referido Código otorga en sus artículos 5º, 16 y 21. Hágase saber, exijáse la reposicion del papel sellado, publíquese, compulsénse las cópias respectivas para el Semanario Judicial, y remítáanse estos á la Suprema Corte de Justicia para los efectos legales. Así lo sentenció y firmó el C. Lic. Miguel Mejía, Juez de Distrito del Estado de Hidalgo. Doy fé.—*M. Mejía.*—*Francisco Briseño*, una rúbrica.

Es copia que certifico. Pachuca, Marzo 28 de 1873.—*Francisco Briseño*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Mayo 6 de 1873.—Visto el recurso de amparo que con fecha 15 de Enero del corriente año, promovieron en Pachuca, ante el Juez de Distrito del Estado de Hidalgo, los Sres. Juan Gould, Tomas Tello, Marcial Islas, Teodoro Guzman, Javier Elscser, Manuel Carmona, Trinidad Hidalgo y Rafael Islas, mineros, beneficiadores y fundidores de metales de plata en aquel mineral, contra una Orden del Administrador de rentas del mismo, por la cual se impone á los promoventes la obligación de hacer manifestaciones de las fundiciones que hicieren cada quince dias, con expresion de los nombres de los dueños de las platas, conminandoseles con la pena de diez á quinientos pesos, en el caso de no cumplir esa disposicion, que alegan viola en sus personas las garantías otorgadas en los artículos 5º, 16 y 21 de la Constitucion federal. Visto el informe del Administrador de Rentas de Pachuca, autoridad responsable del acto reclamado, exponiendo: que no ha hecho mas que transcribir á los promoventes, un oficio que recibió de la Secretaría de Hacienda del Estado, ordenándole que exijiese las manifestaciones referidas, cuyo objeto es hacer efectiva la fraccion 3ª del artículo 1º del decreto número 156, que impone un dos por ciento sobre el valor de la plata que se extraiga de los minerales del Estado. Vistas las demas constancias de autos, y teniendo en consideracion, que en las circunstancias que constituye el caso, la obligación que se impone á los beneficiadores y fundidores quejosos, importa la exigencia de un servicio personal sin las condiciones que lo justifican, conforme al artículo 5º de la Constitucion federal, y que en esta virtud, de la exigencia expresada resulta la violacion de la garantía que ese artículo constitucional otorga, y que los quejosos reclaman; con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, se resuelve lo siguiente: Se confirma la sen-

tencia que pronunció el Juez de Distrito del Estado de Hidalgo en Pachuca, á 20 de Marzo último, en cuya sentencia declara: que la Justicia de la Union ampara y protege á los Sres. Juan Gould, Tomas Tello, Marcial Islas, Teodoro Guzman, Javier Elscor, Manuel Carmona, Trinidad Hidalgo y Rafael Islas, contra la orden del C. Administrador de Rentas del Distrito de Pachuca, de la que se ha hecho mencion, por atacar la garantía individual que la Constitucion federal otorga en su artículo 5º

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de Distrito de donde proceden, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar,* secretario.

Es copia que certifico. México, Mayo 10 de 1873.—*Lic. Enrique Landa,* oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado 2º de Distrito de México por Dª Francisca Soriano en representacion de su hijo Eufracio Ramirez, contra la consignacion de este al servicio de las armas.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

Ciudadano Juez.

El promotor que suscribe en el juicio de amparo promovido por Doña Francisca Soriano en favor de su hijo Eufracio Ramirez,

contra la determinacion del C. comandante militar del Distrito federal que lo destinó al servicio de las armas contra la voluntad del referido Ramirez, supuesto el estado del juicio que es el de alegar, y haciéndolo en los términos designados por la ley, dice: que la justificacion de V. se ha de servir declarar en definitiva, que la Justicia Federal ampara y protege al C. Eufracio Ramirez, contra el acto en virtud del cual se le ha privado del goce de su libertad, obligándole á servir en la carrera de las armas sin su consentimiento, porque con tal determinacion se violan en su persona las garantías individuales que otorga el artículo 5º de la Constitucion.—En efecto, estando en pleno vigor el Código fundamental de la República al tiempo en que Ramirez ha sido destinado al servicio militar, como lo demuestra la comunicacion en que la comandancia manifiesta por que causa mandó fiarlo en el batallon número 27, bien sea porque del Estado de México á cuyo territorio pertenece el Distrito de Tlalmanalco, ó porque esa disposicion emanada directamente de la comandancia militar, de todos modos la violacion de las garantías individuales es incontestable, y por lo mismo, el quejoso se encuentra en las condiciones que se requieren para que la Justicia Federal le otorgue el amparo que solicitaba.—En consecuencia el infrascripto promotor así lo pide al C. Juez por conclusion, segun tiene expuesto al principio, por ser de rigurosa justicia.—México, Abril 14 de 1873.—*Moctezuma.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

México, Abril 23 de 1873.—Visto el presente juicio de amparo promovido por Dª Francisca Soriano en representacion de su hijo Eufracio Ramirez, contra la determinacion de la Comandancia militar del Distrito, en virtud de la cual fué consignado sin su voluntad al servicio de las armas.